

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



Medellín, veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario identificado con el radicado número 05001 31 05 008 2017 00548 01, promovido por la señora **MARIA LEONILA ARIAS PATIÑO**, en contra del **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante frente a la sentencia proferida el 28 de agosto de 2018 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los

procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **229**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

La señora María Leonila Arias Patiño demandó al Departamento de Antioquia pretendiendo se declare que entre el señor José Aldemar Arboleda Londoño y el ente departamental existió un contrato de trabajo, y como consecuencia, se condene al demandando al reconocimiento y pago de la pensión sustitutiva por la muerte de su cónyuge José Aldemar Arboleda Londoño, a partir del 30 de septiembre de 1993 y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones expuso que contrajo matrimonio católico con el señor José Aldemar Arboleda Londoño el 1º de junio de 1979, compartieron techo, lecho y mesa y con sociedad conyugal vigente hasta el día del fallecimiento del citado causante ocurrido el 30 de septiembre de 1993. Aduce que su cónyuge laboró al servicio del Departamento de Antioquia entre el 23 de junio de 1980 y el 29 de septiembre de 1993, desempeñando el cargo de obrero en la Secretaría de Obras Públicas. Agrega que reclamó ante el demandado la pensión sustitutiva por muerte, y la entidad mediante Resolución 8209 de 18 de septiembre de 2003, se la negó aduciendo haber pagado tal prestación a una persona que desconoce. En el mismo acto administrativo se reconoce la calidad de empleado oficial del causante.

El Departamento de Antioquia en el escrito de réplica aceptó la existencia del vínculo laboral entre el 23 de junio de 1980 y el 29 de septiembre de 1993, equivalente a 4.843 días, esto es 13 años y 98 días, la calidad de trabajador oficial y el cargo desempeñado por el señor José Aldemar Arboleda Londoño. Precisa que la hoja de vida del causante da cuenta que la señora María Leonila Arias Patiño mediante la Resolución 00145 de 21 de enero de 1994, obtuvo el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, el seguro de muerte, auxilio por cesantías y los emolumentos salariales que el causante no alcanzó a cobrar, rubros que fueron recibidos a conformidad por la actora. Que posteriormente, por medio de la Resolución 8209 de 18 de septiembre de 2003, la entidad no accedió al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por la demandante por cuanto el señor José Aldemar Arboleda Londoño no acumuló 20 años de servicios ni 55 años de edad, requisitos contemplados por la normatividad vigente para la época del deceso, esto es, la Ley 33 de 1985. Que el causante tampoco acreditó las exigencias de la Convención Colectiva de Trabajo vigente (Laudo Arbitral del 31 de agosto de 1993) aplicable a los trabajadores oficiales, para acceder a la pensión de jubilación, estos son, 20 años de trabajo y 50 años de edad. Se alude a que la sustitución de pensión, hoy denominada pensión de sobrevivientes en el sector público, se encontraba regulada por el artículo 1º de la Ley 12 de 1975, normatividad que estableció una segunda modalidad más bondadosa en favor del cónyuge supérstite para la sustitución del riesgo, en la que se consagró el derecho a la pensión, con el solo cumplimiento de servicio exigido para obtener la pensión de jubilación, aunque el titular llegare a fallecer antes de cumplir la edad mínima, que para el caso no aplica pues se itera que el causante solo tenía 13 años y 98 días. Agregó que en el caso de la accionante no es procedente aplicar los preceptos de la Ley 100 de 1993 por cuanto su vigencia se dio para el Departamento de Antioquia el 30 de junio de 1995. Se opuso a totalidad de las pretensiones.

Formuló las excepciones de fondo de *Inexistencia de la obligación, Prescripción, Cobro de lo no debido y Legalidad de los actos y las normas administrativas.*

En sentencia proferida el 28 de agosto de 2018, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín absolvió al Departamento de Antioquia de todas las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la actora.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la demandante inconforme con la decisión de primera instancia, señaló que se desconoce la calidad de trabajador oficial del señor José Aldemar Arboleda Londoño, por lo tanto, en el caso de su representada le son aplicables el Decreto 3041 de 1966 y el Decreto 758 de 1990 bajo los postulados del principio de la condición más beneficiosa, siendo la demandante merecedora de la pensión de sobrevivientes.

Frente al recurso promovido por el apoderado del demandante, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con los Artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta segunda instancia consiste en establecer si a la demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión sustitutiva por la muerte de su cónyuge José Aldemar Arboleda Londoño, a partir del 30 de septiembre de 1993.

CONSIDERACIONES

En este juicio no existe discusión que los señores María Leonila Arias Patiño y José Aldemar Arboleda Londoño contrajeron matrimonio católico el 1° de junio de 1979. Que el señor José Aldemar Arboleda Londoño falleció el 30 de septiembre de 1993, y que el causante prestó sus servicios para el Departamento de Antioquia del 23 de junio de 1980 al 29 de septiembre de 1993, equivalente a 4.843 días y 13 años y 98 días, ostentando la calidad de trabajador oficial en el cargo de obrero en oficios varios en la Secretaría de Obras Públicas, sin efectuar aportes.

En virtud del principio de la carga de la prueba o auto responsabilidad, consagrado en el artículo 164 y 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión normativa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social. Las partes están obligadas a probar el supuesto de hecho de las normas jurídicas que consagran el derecho que reclaman, manteniendo la obligación de aportar los soportes en que se basan sus afirmaciones, con las cuales pretenden se les reconozca un derecho, la aplicación de una norma, o un efecto jurídico particular, el no hacerlo conlleva inexorablemente a la negativa de éstos.

En desarrollo de tales preceptos normativos, la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 25 de octubre de 2011, radicado 37547 sostuvo:

“...La Sala considera que el Tribunal no distorsionó el verdadero sentido de la regla de juicio de la carga de la prueba, contenida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil –aplicable al procedimiento del trabajo y de la seguridad social, merced a lo dispuesto en el artículo 145 del estatuto de la materia-, porque la carga de la prueba del tiempo servido por el trabajador al empleador la soporta el primero, de modo que la falta de demostración del tiempo de servicios comporta que no hay posibilidad para condenar al pago de prestaciones, salarios e indemnizaciones...”.

La prueba documental obrante en el proceso da cuenta que:

1.- El 5 de noviembre de 1993, la señora María Leonila Arias Patiño reclamó ante el Departamento de Antioquia la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su cónyuge José Aldemar Arboleda Londoño, y la entidad en la Resolución 145 de 21 de enero de 1994, al resolver tal solicitud indicó que:

“...Según el Laudo Arbitral del 31 de agosto de 1993, el Departamento de Antioquia reconocerá una indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes, cuando un trabajador oficial beneficiario de este, fallezca estando al servicio del Departamento de Antioquia y no haya lugar a sustitución pensional, dicha entidad pagará a su cónyuge, o compañero (a) permanente y a sus hijos menores de edad, inválidos (entendiéndose por tales aquellos cuya merma en la capacidad laboral sea igual o superior al 50% y a los hijos mayores de edad que se encuentren estudiando y por ello no puedan trabajar hasta los 25 años), una suma de dinero por una sola vez.

Ahora bien, el literal “C” del Laudo Arbitral establece: Si el trabajador oficial lleva más de diez años y hasta veinte años de servicio, la indemnización será el equivalente a diez meses del salario devengado...”.

Con fundamento en lo anterior ordenó en favor de la demandante el reconocimiento y pago de la suma de \$1.499.400 a título de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes.

2.- El Departamento de Antioquia a través de la Resolución 146 de 21 de enero de 1994, preció que:

“...El artículo 34 del Decreto Nacional 3135 de 1968. Establece que, en el caso de fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial en servicio, las prestaciones a que haya lugar se pagarán a los beneficiarios que a continuación se determinan, así: 1) la mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos legítimos y naturales del empleado o trabajador, en concurrencia estos últimos en las proporciones establecidas por la Ley Civil...”.

Resolvió reconocer y pagar en favor de la señora María Leonila Arias Patiño las siguientes sumas: \$2.631.674 por seguro de muerte, \$2.996.194 por auxilio de cesantía y \$812.514.03 por vacaciones, prima de vacaciones, jornal, prima de navidad y horas extras y festivos que el causante no alcanzó a cobrar.

3.- El 17 de julio de 2003, la actora solicitó ante el Departamento de Antioquia la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su cónyuge José Aldemar Arboleda Londoño, y la entidad por medio de la Resolución 8209 de 18 de septiembre de 2003, se la negó aduciendo que mediante las Resoluciones 145 y 146 de 21 de enero de 1994, le fueron concedidos el seguro de vida y la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes por valor de \$2.631.674 y \$1.499.400, respectivamente. Señaló, además:

“...Que dicho reconocimiento se hizo de conformidad con la normatividad vigente para la época del deceso del señor Arboleda Londoño, es decir, se dio aplicación a la Ley 6 de 1945, así como a la Ley 64 de 1946, normatividad que no contemplaba la existencia de una pensión de sobrevivientes, pero en cambio contemplaba el seguro por muerte, mismo que fue reconocido oportunamente.

Que los trabajadores del Departamento de Antioquia, para la época en que falleció el señor José Aldemar Arboleda Londoño, no cotizaba a ningún sistema de pensiones, pues el reconocimiento de este derecho estaba a cargo del departamento, sin necesidad de hacer ningún aporte o cotización por parte del trabajador para el financiamiento de esta.

Que en materia de prestaciones para los beneficiarios del ex trabajador para la época en que ocurrió el deceso del señor José Aldemar Arboleda Londoño, estaba vigente la Ley 6 de 194, la misma que en su artículo 17, literal d) establece: “Seguro por muerte del empleado u obrero, equivalente a la cesantía que le hubiese correspondido y que se pagará a sus beneficiarios o herederos.

Que, en el presente caso, no es procedente el reconocimiento de pensión de sobrevivientes a favor de la peticionaria, por cuanto el tiempo laborado por el señor José Aldemar Arboleda Londoño al Departamento de Antioquia, no llegó a los 20 años de servicio, que era el tiempo requerido para el eventual reconocimiento de la pensión solicitada, conforme las normas vigentes para la época, pues en su lugar se reconoció el seguro por muerte en legal forma.

Que en manera alguna es procedente dar aplicación a las disposiciones normativas contempladas en la Ley 100 de 1993, en materia de pensión de sobrevivientes, como quiera que esta es norma posterior, y entró a regir para los empleados del nivel territorial (Departamento de Antioquia) a partir del 30 de junio de 1995, sin que sus efectos fueran retroactivos...”.

4.- El 4 de mayo de 2017, la accionante petitionó al ente departamental demandado, porque le informara respecto de los documentos requeridos para reclamar la pensión del causante, y la entidad mediante respuesta de 16 de los

mismos mes y año, le indicó que “...*una petición en el mismo sentido y con similar fundamento, le fue resuelta negativamente por medio de la Resolución No. 8209 del 18 de septiembre de 2003...*”.

El apoderado del demandante en el recurso de alzada expone que a su representada le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, de acuerdo con la normatividad instituida por los Decretos 758 de 1990 y 3041 de 1966, bajo los postulados del principio de la condición más beneficiosa, siendo este el punto medular de recurso, sin embargo, en criterio de la Sala dicha normatividad no resulta aplicable al caso concreto por las siguientes razones:

En primer lugar, porque del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 señaló con total claridad que el sistema general de pensiones para los servidores públicos de los niveles departamental, municipal y distrital entraría a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha en que así lo determinara la respectiva autoridad gubernamental, lo que quiere decir que para este específico sector de servidores oficiales la ley facultó a las autoridades locales para que fijaran el momento a partir del cual empezaría a regir para sus trabajadores esta parte del régimen de seguridad social, con la salvedad que si no hacían tal señalamiento se entendería que su vigencia sería en la fecha atrás reseñada.

En el presente caso no se adujo ni acreditó que las autoridades competentes del Departamento demandado hubiesen anticipado la entrada en vigencia del sistema general de pensiones para sus trabajadores para una fecha anterior al 30 de junio de 1995, de donde se sigue que dicha vigencia empezó en esta fecha.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al respecto, en la sentencia de 1° de febrero de 2011, reiterada en la sentencia SL 6708 de 20 de abril de 2016, radicado 43.171, señaló:

“...La lógica consecuencia de la vigencia posterior del sistema general de pensiones, para los empleados de las entidades territoriales, es que las prestaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones en general sobre esta temática, entre ellas las relativas a cotizaciones, no se aplican para casos o siniestros ocurridos antes de que la autoridad respectiva hubiese ordenado dicha entrada en vigor o, de no haberse dado esta hipótesis, con anterioridad al 30 de junio de 1995, fecha máxima señalada por el legislador para dicho evento.

Suponer lo contrario implica desconocer los efectos de la ley en el tiempo y pasar por alto que solamente a partir de su entrada en vigencia la ley obliga al Estado y a los particulares y que el legislador en su condición de “hacedor de leyes” es el llamado a fijar el momento en el que empieza a regir, naturalmente que en desarrollo de esta potestad puede definir con respecto a puntuales aspectos, atendiendo a particularidades regionales o por la complejidad del asunto regulado, fechas de vigencia diferentes, como aconteció con la Ley 100 de 1993, que con respecto de algunos temas empezó a regir desde el momento mismo de su publicación (artículo 289), frente a otros desde el 1 de abril de 1994, y en cuanto a otros, en fecha posterior.

Lo anterior no pugna con el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, porque lo que dispone es precisamente que las normas sobre trabajo, en la que se entienden incluidas las de seguridad social, producen efecto general inmediato, es decir, desde “el momento en que dichas normas empiecen a regir”, lo que significa que la sola promulgación o publicación de la norma o la entrada en vigencia de algunos de sus artículos no implica su aplicación general inmediata, pues si con respecto de algunas materias el legislador fijó una fecha de vigencia diferente y posterior, la aplicación de estas solamente es posible a partir de dicho momento.

Resulta igualmente de interés destacar que no existe contrariedad entre los artículos 289 y 151 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a fechas de vigencia diferentes y que debe privilegiarse uno sobre el otro, porque es claro que se debe entender que la vigencia señalada en la primera norma citada está referida a asuntos con respecto de los cuales el legislador no fijó una fecha distinta, pues cuando así lo hizo, como aconteció con el segundo, es apenas elemental que interpretada la ley de modo integral, es dable deducir que corresponde aplicar éste y no aquel, lo cual denota que los momentos de vigencia son diferentes y por tal razón las normas son coexistentes y no excluyentes...”

Corolario de lo anterior, para el sector público la pensión de sobreviviente se contempló con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que para el nivel departamental se dio el 30 de junio de 1995, pues antes de ello, solo estaba prevista para el pensionado fallecido conforme lo previsto en la Ley 33 de 1985, o con los requisitos de jubilación establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo, por lo demás, fue la Ley 100 de 1993 la que fijó un régimen pensional general para todos los trabajadores del país, independientemente de la naturaleza de su vinculación, es decir, sin distinciones frente a que la relación laboral fuera de tipo contractual o estatutaria, fijando unas condiciones y requisitos comunes para todos.

En segundo lugar, porque como se advierte, el régimen pensional para los trabajadores oficiales del Departamento de Antioquia para la época del deceso del señor José Aldemar Arboleda Londoño ocurrido el 30 de septiembre de 1993, era el contenido en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985” *Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público*”, norma que regulaba las pensiones de jubilación y no las de sobrevivientes, es decir, la contingencia de la muerte estaba prevista solo en caso de fallecer el pensionado, y que dispuso:

“...ARTÍCULO 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio...”.

En este evento no se colma el presupuesto aludido, para que la demandante pueda acceder a la pensión deprecada en sustitución del causante porque este nació el 9 de noviembre de 1944 y solo laboró al servicio del Departamento de Antioquia desde el 23 de junio de 1980 hasta el 29 de septiembre de 1993, equivalente a 13 años y 98 días.

En el escrito de réplica y en la Resolución 145 de 21 de enero de 1994, se alude que la Convención Colectiva de Trabajo (Laudo Arbitral del 31 de agosto de 1993), vigente para la fecha del fallecimiento del causante, en el artículo 96, prevé:

“...El Gobierno Departamental continuará reconociendo la pensión de jubilación a todos sus trabajadores, al cumplir veinte (20) de trabajo y cincuenta (50) años de edad...”.

Requisitos que tampoco cumple el señor José Aldemar Arboleda Londoño.

A juicio de la Sala, si bien tal Convención Colectiva de Trabajo no fue aportada con la solemnidad establecida en el artículo 469 del CST, también lo es, que las partes no discutieron la validez del texto convencional, por lo que, a voces de lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL - 4792 de 2019 que reiteró lo dicho en la sentencia SL - 20037 de 2017, puede decirse que su aplicación fue un punto indiscutido por las partes. En tal orden, se tiene que dicho cuerpo normativo no consideró la pensión de sobrevivientes, y así lo

hizo saber el ente departamental demandado desde la contestación del libelo al advertir dicha situación.

En tercer lugar, porque el único régimen aplicable en el caso de la accionante para acceder al reconocimiento de la prestación económica deprecada, sería la Ley 12 de 1975, norma que reguló la pensión de sobrevivientes de los beneficiarios de los empleados públicos, la cual estaba vigente para el deceso del causante.

Frente a la vigencia de la Ley 12 de 1975, la Corte Constitucional en la sentencia C-1289 de 5 de diciembre de 2001, explicó que el régimen general estatuido para la pensión de sobrevivientes de dicha ley rigió hasta tanto entró a regir el sistema general de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, precisando:

“...Si bien la demanda cumplió a cabalidad con cada uno de los requisitos formales exigidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, motivo por el cual fue admitida, al proceder a comparar el contenido normativo de la disposición demandada frente al artículo sugerido por las actoras, para efectos de analizar la violación del principio de igualdad, advierte la Corte que la acusación se estructura sobre un presupuesto equivocado, al considerar que la norma acusada consagra un régimen especial, pues como se dejó señalado en párrafos anteriores, tanto el artículo acusado como la Ley 100 de 1993 son regímenes generales en los que se regula idéntica prestación social para el mismo sector de trabajadores.

Esta la razón para que la Corte considere que el artículo 1 de la Ley 12 de 1975, materia de acusación parcial, que consagraba la pensión de sobrevivientes aplicable a los trabajadores del sector público y privado, ha sido derogado por la Ley 100 de 1993 al reglamentar en los artículos 46, 47, 48, 49, 73 y 74 la misma prestación para los mismos servidores, pues de conformidad con las normas que rigen la interpretación de las leyes la ley posterior deroga la anterior. ...”.

La Ley 12 de 1975, en el artículo 1º indicó:

“...ARTÍCULO 1. El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas...”.

No obstante, se itera que el causante solo prestó sus servicios para el Departamento de Antioquia durante 13 años y 98 días.

El anterior escenario normativo permite aseverar que a la demandante no le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada.

En consecuencia, teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento del señor José Aldemar Arboleda Londoño (30 de septiembre de 1993), la calidad de trabajador oficial y el régimen laboral y pensional aplicable ya descrito en antecedentes, es evidente que resulta indiscutible para la Sala que los Decretos 758 de 1990 y 3041 de 1966, mediante los cuales pretende la parte demandante se le reconozca la pensión de sobrevivientes, no pueden ser aplicados, dado que se itera conforme el régimen jurídico aplicable a los trabajadores oficiales del Departamento de Antioquia, para la época del fallecimiento, dicha prestación estaba prevista solo para el pensionado fallecido o con los requisitos para la pensión de jubilación.

Así las cosas, en el presente evento la parte actora no cumplió con la carga probatoria antes referida, razón por la cual se debe confirmar la decisión absolutoria que se revisa en apelación, por las razones expuestas.

DE LAS COSTAS

Ante la desventura del recurso de alzada las costas en ambas instancias corren en favor del Departamento de Antioquia y a cargo de la señora María Leonila Arias Patiño.

En esta instancia se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$1.160.000

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 28 de agosto de 2018 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, que se revisa en apelación, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Ante la desventura del recurso de alzada las costas en ambas instancias corren en favor del Departamento de Antioquia y a cargo de la señora María Leonila Arias Patiño.

En esta instancia se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$1.160.000

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

05001310500820170054801

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4913c202374634c014e91e2988d34517d8b1c19befbe0a70acb340a29e1d2359**

Documento generado en 28/07/2023 03:18:21 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>